

POBREZA Y MARGINACIÓN: CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Francisco Mieres
Mayo de 1995

Resulta relativamente fácil establecer las causas profundas y globales de la pobreza y la marginalidad contemporáneas: la polarización de la riqueza, sobre todo de medios de producción modernos a que dio lugar el capitalismo, primero en los países que realizan la revolución industrial, luego globalizada a través de la colonización que impuso el desarrollo desigual entre naciones inferiores, convertidas en subdesarrolladas, acumuladoras de privación.

La concentración de la producción capitalista en pocos países les permitió asegurar a su mayoría trabajadora un nivel de consumo suficiente para la reproducción normal de la capacidad productiva, aunque siempre se mantuvo una fracción no incorporada permanentemente a la fuerza de trabajo (ejército industrial de reserva) por debajo de ese nivel. La persistencia del desempleo y su expansión aun en épocas de crecimiento técnico, es una de las secuelas contradictorias del sistema, aun en su núcleo. Si consideramos la pobreza como insuficiencia para alcanzar los requerimientos biológicos normales de la existencia humana, en los países del núcleo la pobreza y la marginalidad son fenómenos minoritarios. A cambio de ello, en la periferia subdesarrollada, mucho más poblada, la incidencia es mayoritaria y masiva, añadiéndose fenómenos concomitantes de opresión política colonialista y discriminación social que reforzaron la privación económica.

Estas contradicciones del capitalismo generaron en su seno los grandes movimientos sociales laboristas y socialistas que apuntaron a la transformación del Estado o a la sustitución del sistema capitalista para hacer del “estado de bienestar” y del desarrollo social metas virtualmente universales de la humanidad contemporánea, cuya última expresión ha sido la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague. La primera frase de su declaración es elocuente:

Por primera vez en la historia, por invitación de las Naciones Unidas, nos reunimos en calidad de Jefes de Estado y de gobierno para reconocer la importancia del desarrollo social y el bienestar de la humanidad y dar la máxima prioridad a esos objetivos en la hora actual y en el siglo XXI.

Pienso que la nobleza de estos propósitos corresponde con el espíritu que anima nuestro evento, ratificando su validez. Su motivación contemporánea arranca de la victoria sobre el fascismo y la guerra que lleva a la creación de la ONU y la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales, que más tarde serían objeto de un pacto internacional especial. Los intentos de pasar de las palabras a los hechos, de convertir los derechos proclamados en obligaciones reales para los Estados. han revelado lo difícil y polémico de la cuestión, poniendo de relieve cuán resistentes son las fuentes y los mecanismos de la privación: la explotación, la discriminación y la opresión, en círculos viciosos. Por eso es valioso el reconocimiento y la precisión de estos objetivos 50 años después, en el segundo párrafo de la Declaración de Copenhague:

Reconocemos que la población del mundo ha indicado de distintas maneras que existe la necesidad urgente de resolver graves problemas sociales, especialmente la pobreza, el desempleo y la marginación social, que afectan a todos los países. Nuestra tarea consiste en atacar las causas subyacentes y estructurales y sus penosas consecuencias, a fin de reducir la incertidumbre y la inseguridad en la vida de los seres humanos.

Aunque bien conocemos la distancia entre el dicho y el hecho, no deja de ser importante el reconocimiento por los gobiernos de que los tres problemas más graves para la humanidad son la pobreza, el desempleo y la marginación social, y el compromiso de asignarles la primera prioridad en la búsqueda de soluciones. El ataque a esta tríada de problemas constituye el núcleo del desarrollo social participativo y equitativo, contrario al paradigma liberal, individualista y mercantilista sostenido por las élites privilegiadas de algunas potencias.

La presencia nutrida y militante de las organizaciones sociales no gubernamentales en Copenhague y su presión abrumadora en favor de un nuevo paradigma, es prueba fehaciente del grado de adecuación que ésta expresa a las necesidades y aspiraciones de la inmensa mayoría planetaria.

Los alarmantes hallazgos evidenciados en la Cumbre constituyen una crítica severa a los modelos de crecimiento económico imperantes en este medio siglo, imbuidos de desarrollismo economicista elitista, con menosprecio de la equidad y de la participación social, así como de los efectos devastadores sobre los recursos naturales y el hábitat humano; lo que llevó al desconocimiento real de los derechos económicos y sociales de enormes contingentes de la población. El rescate de tales derechos como metas explícitas del desarrollo social, al lado de los derechos políticos e integrados a un desarrollo económico de amplia base y sostenido, se convierte en columna vertebral de una nueva esperanza humana, de un motivo común de lucha global y de una nueva racionalidad luego de los descabros que el paradigma modernista ha sufrido en términos económicos, políticos, culturales y psicológicos en tiempos recientes. Algunos descalifican lo que hemos vivido como **maldesarrollo** y reivindican el término **desarrollo humano** al que integran el logro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para todos. Se trata de una criatura en estado aún embrionario en la conciencia colectiva de la humanidad; pero al menos ha adquirido ya status de feto en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Ojalá cuaje pronto como la nueva utopía necesaria que pueda hacer del siglo XXI algo mejor del que ahora termina.

Esta postura optimista es quizás indispensable para no dejarnos vencer por la percepción de lo difícil que es la tarea.

Intentando sintetizar algunos de los hallazgos lanzados al mundo en Copenhague, tenemos, entre otros, los siguientes:

1. Han aumentado –y no disminuido– con el progreso económico, las desigualdades sociales: **“en todos los países hay un aumento de la prosperidad de algunos, acompañado lamentablemente de la pobreza extrema de otros”**. Ergo, no es cierto que el crecimiento económico se traduzca a la postre en mejoramiento para toda la sociedad, como quieren (hacer) creer algunos liberales. Al contrario, **“el rápido proceso de cambio y ajuste se ha visto acompañado de un aumento de la pobreza, el desempleo y la desintegración social”**. **“Ha aumentado la distancia que separa a los ricos de los pobres”** (destacado nuestro).

2. Se ha acentuado la brecha entre países ricos y pobres. **“Es mayor la distancia que separa países desarrollados de muchos países en desarrollo”**.

3. **“Más de 1.000 millones de habitantes viven en la pobreza extrema. Una gran proporción, en su mayoría mujeres, tienen un acceso muy limitado a los ingresos, los recursos, la educación, la atención a la salud o a la nutrición”**.

4. **“El consumo y la producción insostenibles, especialmente en los países industrializados, constituyen la principal causa del deterioro continuo del medio mundial y agravan la pobreza y los desequilibrios”**.

5. **“Más de 120 millones de personas están oficialmente desempleadas y muchas más viven en una situación de subempleo. Son demasiados los jóvenes que tienen escasas esperanzas de encontrar empleo productivo”**.

6. Estas secuelas cobran mayor dramatismo cuando se contrastan con el crecimiento acelerado de la población mundial, que las agravarían, y recaen directamente en el corazón noroccidental del sistema mundial predominante de producción. Esto se confirma al señalar que la tríada pobreza-desempleo-marginación **“constituye una manifestación de la ineficacia del funcionamiento de los**

mercados y las instituciones y procesos económicos y sociales”. Lo cual da una idea del tamaño del reto planteado en la transformación requerida del sistema global.

7. Ese reto podría definirse con el lema del más reciente Informe de la OMS sobre la salud en el mundo (1995): **“reducir las desigualdades”**. Es decir, un desarrollo equitativo e igualizante, en vez del desarrollo desigual y polarizador actual, que hace que la esperanza de vida en los países ricos sea de 78 años y sólo de 43 en los países pobres. O que en éstos tenga lugar el 99% de las muertes por causas evitables (enfermedades transmisibles y por causas maternas, perinatales y neonatales). Los niños son las primeras víctimas de esta desigualdad. La mortalidad infantil es de 7 por cada mil nacidos vivos en los países desarrollados, mientras alcanza a 110 en los “menos adelantados”. Y estas brechas no se reducen. La OMS estima que para el año 2000 ¡la esperanza de vida subirá a 79 años en el núcleo desarrollado y bajará a 42 años en la periferia pobre!

8. Según la OMS, el factor común en este cuadro desolador es la pobreza, que resulta ser la enfermedad más asesina. Leamos: **“la pobreza es la causa profunda del acortamiento de la vida, la discapacidad y la inanición, y contribuye de manera importante en la enfermedad mental, el suicidio, la desintegración de la familia y el abuso de sustancias”**. Sólo la pobreza explica que las personas no vacunen a sus hijos, no les suministren agua hervida y que mueran más de 500 mil mujeres al año por dar a luz (El Nacional, 25-5-95). Lo cual nos remite de vuelta a las causas estructurales de la privación, que permiten el enriquecimiento desmesurado y la dominación de una minoría sobre los recursos, las finanzas y los mercados mundiales.

9. El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD ha venido señalando estas disparidades crecientes: para 1989, el quinto más rico de la población mundial recibió el 83% del PTB y el 95% de los préstamos, acumuló e invirtió el 81% de los ahorros y contrató otro tanto del comercio mundial, mientras que a los 4 quintos

restantes de la población les tocaron porcentajes que fueron del 5% al 17% de esos indicadores del poderío económico global. No sobra insistir en que esas desigualdades son acumulativas. La relación entre los ingresos por persona del quinto más rico y del quinto más pobre de la población fue de 30 a 1 en 1960 y hoy es más de 60 a 1.

10. Para dar un solo ejemplo de por qué se acentúa esa disparidad como resultado del dominio de ese “quinto real” (que R. Reich llama “analistas simbólicos”) en las redes del comercio mundial, he aquí el testimonio del PNUD (Informe de 1992): **“Los mercados globales no operan libremente. Esto, unido a su condición de socios desiguales, les cuesta a los países en desarrollo 500 mil millones de dólares anuales, o sea, 10 veces más de lo que reciben de ayuda del exterior. Las restricciones más evidentes son las que conciernen a bienes y trabajo. Las barreras arancelarias y no arancelarias mantienen por fuera muchas manufacturas provenientes de países en desarrollo, y las restricciones de inmigración impiden a los trabajadores inmigrar en busca de mejores rendimientos por su trabajo”**.

11. No es corta la lista de dolencias sociales que acompañan la privación económica y que la Cumbre Mundial fija como prioritarias, a saber:

el hambre crónica, la mal nutrición, los problemas de las drogas ilícitas, la delincuencia organizada, la corrupción, la ocupación extranjera, los conflictos armados, el tráfico ilícito de armas, el terrorismo, la intolerancia y la incitación al odio por motivos de raza, origen étnico, religión u otros motivos, la xenofobia y las enfermedades endémicas, transmisibles y crónicas.

Se podría abundar sobre las secuelas de la pobreza y de la marginalización, con ayuda de los indicadores de la OMS y del PNUD. Pero juzgo que los mencionados son suficientes para tener un cuadro global de la compleja perspectiva ante la que estamos. Sin demasiadas pistas para aventurar un horizonte positivo, más allá de la esperanza y la convicción de la justicia de nuestra causa, convalidadas en Copenhague.

La experiencia internacional del último medio siglo, pese a haber sido una época de luchas y mejoras sociopolíticas y de transformaciones revolucionarias sin precedentes, no ha conseguido convertir en obligaciones reales y garantías efectivas los derechos económicos asociados a la superación de la pobreza: alimentación, empleo, saneamiento, vivienda, salud, etc.

La onda de liberalismo que barrió al planeta durante el último decenio vino a empeorar la situación. En un estudio del Centro por los Derechos del Hombre consagrado al “derecho a una alimentación suficiente como derecho del hombre”, publicado en 1989, se confiesa abiertamente: **“nuestra impotencia para realizar el derecho a ser liberado de la necesidad, muestra el camino que nos falta por recorrer para instaurar el orden internacional concebido por los fundadores de la Organización de las Naciones Unidas”**. Luego de mostrar que las insuficiencias de la alimentación no se deben a escasez de producción sino a las formas de propiedad y distribución, el estudio señala la oposición de varias grandes potencias a la formulación de un orden alimentario internacional regido por una autoridad capaz de hacer pasar a los hechos el derecho proclamado en la Declaración Universal firmada por todos los países miembros de la comunidad internacional.

En conclusión, aunque el **“derecho a la alimentación es ampliamente reconocido en el derecho internacional”**, las obligaciones derivadas para los Estados, a los cuales incumbe aplicarlas, no han sido definidas ni establecidas. Como consecuencia, más de 1.100 millones de personas –un quinto de la población mundial– no tienen suficientes medios para obtener la cesta alimentaria básica, o sea, están sumidas en la pobreza crítica.

Un análisis de los demás derechos económicos y sociales nos conduciría a resultados análogos y convergentes: el orden internacional institucionalizado en la ONU no ha cumplido las promesas y expectativas generadas respecto de los problemas económicos-sociales claves de la humanidad ni podrá cumplir sin una transformación radical.

Es menos complicado abordar la problemática nacional para nosotros. Es más fácil responder a preguntas tales como si disponemos de recursos naturales suficientes para alimentar, dar trabajo y asegurar una vida digna a todos los venezolanos. La respuesta parece obviamente positiva. Sabemos también que se ha intentado hacerlo más de una vez, y no sólo no se ha logrado, sino que últimamente nos hemos ido alejando cada vez más de esa meta, como lo muestra el deterioro ostensible de los índices de pobreza, marginalidad y privación social en general. La paradoja aquí es tanto más desconcertante por cuanto el grueso de los recursos económicos primarios del país es de propiedad estatal, o sea, propiedad colectiva de los venezolanos.

Sin embargo, el reconocimiento oficial más reciente, ante la Cumbre Mundial, es indubitable: **“La pobreza, la desigualdad, la exclusión nos han acompañado a lo largo de nuestra historia”**. **“Reconocemos que Venezuela padece los efectos de un severo empobrecimiento de la mayor parte de su población y que comienzan a aparecer signos de exclusión que comprometen la dignidad de nuestro pueblo”** (Venezuela ante la Cumbre Mundial de Desarrollo Social).

El documento aprobado en la pequeña cumbre social nacional celebrada en la APUCV, los días 22 y 23 de febrero de 1995, recoge la síntesis de la situación actual como sigue:

“En suma, la sociedad venezolana ha venido sufriendo un retroceso absoluto en su ‘desarrollo humano’, una involución económico-social, e incluso política. El requerimiento de una transformación radical es obvio hoy día. Pero las viejas fuerzas reformistas o revolucionarias político-sindicales se han corrompido o debilitado en extremo, y se han deslegitimizado. Las presuntamente de relevo están aún muy confundidas y dispersas, y las organizaciones sociales de base exhiben incapacidad de articularse como poder constituyente de un nuevo régimen, ni siquiera como interlocutores de un gobierno de precaria base propia, cuya política social es excluyente, cupular, heredada del régimen antecesor e hipotecada al dúo BM-FMI, y cuya política económica se hace depender de la inversión monopolista extranjera en petróleo, oro y otros minerales, retro trayéndonos a medio siglo atrás”.

En realidad, los indicadores disponibles reflejan un grave deterioro entre fines de los años 70 y los de este decenio, manifestándose en los últimos años como un proceso de estanflación, que es el peor de los mundos posibles porque se juntan la inflación (esto es, el encarecimiento persistente de la vida) con la caída del producto nacional y del empleo (o sea, menores ingresos y más desempleo). De hecho, un indicador sintético usado en el Informe Oficial de Venezuela ante la Cumbre Mundial, pone de relieve elocuentemente el brutal deterioro social del último sexenio. Es denominado índice de miseria y es la suma de las tasas de desempleo e inflación. Había sido el 8.6% en 1970, llega a 52.2% en 1993, y supera el 80% en 1994 (pág. 21 del informe). Con ello los índices directos de pobreza, de salud, de cantidad y calidad de vida, que habían experimentado un lento mejoramiento secular, desde la época de la segunda guerra mundial, comenzaron a revertirse y a señalar caídas absolutas y persistentes en los marcadores vitales y epidemiológicos más elementales, en lo atinente a educación, delincuencia, seguridad personal, valores éticos, etc.

Todo esto ha conducido a un descenso en el índice de Desarrollo Humano que el PNUD le atribuye a Venezuela, desde 0,874 en 1985 a 0,820 en 1992. Ello ha significado que coetáneamente el país haya bajado en la escala del PNUD hasta el puesto 46 en 1992, y seguramente a uno inferior hoy día, entre los países del mundo según su grado de desarrollo humano, haciéndolo descender desde el grupo más alto hasta el grupo considerado de desarrollo intermedio (Véase Consejo de Economía Nacional, **Perfil de desarrollo Humano en Venezuela, 1994**).

Ello significa que el deterioro social reciente en Venezuela ha sido peor que en el resto de los países relativamente avanzados (con la excepción, seguramente, de los ex-soviéticos y otros ex-socialistas de Europa Central), aun en un período de deterioro global.

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
PIB per cáp.	100	89.1	94.5	101.2	104.9	102.2	96.7
PIB no petriro. p.c.	100	90.2	92.0	97.5	102.5	98.8	91.5
Salario mínimo real	100	107.9	73.7	85.7	97.8	70.8	73.4
Salario promedio real	100	81.7	76.2	71.5	75.1	68.5	56.3
Costo de vida	100	184.5	259.5	384.2	457.7	632.2	1.016.6
Exportación	100	126.8	172.4	148.0	138.4	137.1	155.7
Rsrvs. inter.	100	112.4	175.2	199.2	183.6	178.7	168.1
T. Dsmpleo %	7.1	9.1	10.4	9.5	7.8	6.6	8.7
	100	124.7	142.5	130.1	106.8	90.4	119.2

Fuente: Consejo de Economía Nacional

El cuadro anterior sintetiza el proceso general de deterioro socioeconómico, de empobrecimiento y marginalización en sus rasgos más pertinentes. Muestra no sólo la caída general del ingreso bruto promedio per cápita, sino también el descenso mucho más pronunciado de los salarios promedio y mínimo, indicadores obvios de la situación de los trabajadores, y por ende, de la mayoría de la población. El contraste con el ascenso del valor de las exportaciones y de las reservas monetarias internacionales, son otra muestra de las disparidades crecientes de Venezuela, generadoras de una brecha tan acentuada. Según el Informe Oficial ante la Cumbre (pág. 26) **“en el período 1978-88 el 47% del ingreso nacional corresponde a la remuneración de obreros y empleados, mientras entre 1989 y 1992 esta proporción disminuye al 37%”**. Siendo el “trabajo informal” por cuenta propia y del sector terciario el que más ha crecido dentro de la población activa, el cual alimenta los estratos más bajos de ingresos, el empobrecimiento resulta aún mayor

en este segmento. Tal apreciación es cuantificada en el Informe oficial (pág. 23): **“En 1984, aproximadamente un tercio de los hogares se encontraban en situación de pobreza, siendo los hogares en pobreza extrema el 11%. En los años noventa, la pobreza total casi duplica el valor de 1984, y la pobreza extrema se triplica”**. Los criterios de pobreza extrema y total se basan en la insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta normativa de alimentos y la de bienes y servicios respectivamente.

Al tomar en cuenta el empuje del índice de miseria en 1994 y en lo que va de 1995, y pasar de los hogares a la población, creo no aventurado estimar entre 2/3 y 3/4 la fracción pobre de la población y alrededor de un 40% la que padece extrema pobreza o marginalización.

Tales proporciones coinciden **grosso modo** con las de Fundacredesa para el estrato V (el más pobre) con el 40%, y IV (de ingresos medios-bajos) con el 38% de las familias, que en conjunto arrojan un 78% de familias pobres, para 1993 (Informe Oficial, pág. 24). Podemos afirmar que en esta capa mayoritaria el descenso del nivel de vida es más grave que el marcado por los índices de salarios (promedio y mínimo) reales deflactados por el índice de precios al consumidor. Tales capas gastan la totalidad o la mayor parte de su ingreso en alimentos, por lo que su poder adquisitivo es afectado primordialmente por los precios de los mismos. Éstos precisamente son los de mayor elevación. Por ello cuando se cotejan con este indicador, los salarios entre 1978 y 1992 caen a menos de la mitad en su nivel real de lo que indica el método convencional. Prueba adicional de las desigualdades crecientemente injustas y viciosas, que inducen todas las secuelas perversas en educación, salud, moral, etc. Los hartos mencionados círculos viciosos de la pobreza, horriblos cuando se miran de cerca, temibles cuando nos afectan.

Pienso que no vale la pena extenderse en la labor masoquista de trazar un catálogo detallado de las múltiples secuelas del deterioro social y humano de Venezuela. Son demasiado evidentes y están cada día en los periódicos. Figuran también en los informes oficiales. **“El efecto más importante de la recesión sobre**

la salud se observa en la situación nutricional: los indicadores nutricionales han desmejorado notablemente en los últimos años” (De 2.650 calorías diarias per cápita a fines de los 70, a menos de 2.000 hoy). La ingesta media de proteínas ha caído paralelamente quedando los estratos inferiores por debajo de los mínimos biológicamente requeridos. No sorprenden, por eso, los empeoramientos registrados en todos los indicadores de salud (morbilidad, mortalidad –infantil y materna– en particular, etc. etc.). Un estudio de la Oficina Regional de la UNICEF estableció que la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años pasó de 24.9 por cada mil niños nacidos vivos en 1991 a 26.6 en 1993, cuyas principales causas directas son enfermedades infecciosas y parasitarias, derivadas de carencias económicas, sociales y ambientales. El estudio apunta que en vez de aproximarnos al cumplimiento de las metas fijadas por la UNICEF para el año 2000, nos alejamos de ellas. El mismo informe revela que **“más de un millón de niños trabajan para sobrevivir, de los cuales el 72% en actividades marginales cargadas de toda clase de riesgos, aun para la propia vida”** (Fuente: Análisis de la Situación de la Infancia, la Juventud y la Mujer en Venezuela, abril 1995, Oficina de Área para Venezuela y Colombia. Citados en El Nacional, 10 y 11 de mayo de 1995).

“Enfermedades endémicas, casi desaparecidas en el país, como la malaria y el dengue, han resurgido como consecuencia de las condiciones de insalubridad producidas por la pobreza” (Informe Oficial, pág. 38). Y así sucesivamente, en un largo rosario de males.

Lo mismo si abordamos la educación. Después de un prolongado lapso de mejoramiento y masificación de la enseñanza, hoy se padece retroceso generalizado. Dice el Informe Oficial: **“la crisis económica y el deterioro de los servicios públicos en educación son el principal causante de este empeoramiento en las tasas de matriculación, repitencia y deserción. En efecto, las tasas de matriculación son más bajas, y las de deserción y repitencia son más altas entre las familias pobres”**.

Tampoco merece la pena disputar por la cuestión de si el deterioro social prosigue o si lo peor ya pasó o vivimos un repunte. Cada nuevo informe que aparece no hace sino delatar el agravamiento. Fundacredesa acaba de actualizar para fines de 1994 su estratificación económica de la población. En el año el estrato inferior (V) ha crecido al 43%, y el inmediato superior se mantuvo en el 38%. Este segmento está afectado por el 13.9% de desempleo, mientras el más pobre incide en el 16.5%. El sector intermedio registra un índice de 9.5% de desempleo. Tales niveles superan ampliamente los oficiales (El Nacional, 14-5-95).

Una encuesta de la firma Veneconsultores, citada por "El Nacional" de la misma fecha, sitúa la tasa de desocupación en 15% (en lugar del 9% oficial), lo que significa 1.200.000 desempleados; más la mitad de la población activa subocupada en el sector informal. Cuando se agregan estos indicadores a los de inflación actuales, no es raro que el índice de miseria alcance nuevas cimas. Por lo menos hasta las vísperas del Pacto Antiinflacionario. No podemos menos que desear que éste supere ahora su etapa bufa y vaya en serio.

Esto nos lleva al quebradero de cabeza que son las causas de esta tragedia, al dechado de paradojas que es Venezuela. País petrolero, país rico. Que se precipita al abismo del empobrecimiento y la descomposición en medio de la mayor bonanza de su historia entre 1974 y 1981, cuando se alcanzan los máximos ingresos petroleros, y cuando tiene lugar un proceso de nacionalización de las riquezas del subsuelo. A esta rara dolencia social de la perdición por la riqueza, los economistas del norte la han bautizado "enfermedad holandesa" porque la descubrieron allí, cuando la explotación del gas natural provocó efectos análogos. En verdad, varios años antes publicistas europeos la habían denominado "efecto Venezuela" refiriéndose a las dificultades de crear trabajo productivo en un país con moneda sobrevaluada por el aflujo de una renta internacional. Podríamos denominarla "rentismo" o "fiebre del oro negro". A todo esto se refirió J.P. Pérez Alfonzo cuando pronosticó (y trató de evitar en vano) lo que nos está ocurriendo; "**Hundiéndonos en el excremento del Diablo**" se llama su libro premonitorio.